

09 de Agosto de 2006

La necesidad de una salida política al conflicto armado y social que vive Colombia

Por: Jaime Ernesto Larrota

El acuerdo democrático de todos los colombianos sensibles al futuro de la patria es urgente y, por sobre todo, no puede eludirse ningún esfuerzo tendiente a restaurar la confianza en la posibilidad de la paz, removiendo la injusticia social y la opresión política”.

Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, asesinado el 11 de octubre de 1987.

El régimen político colombiano en cabeza del ahora reelecto presidente Uribe Vélez, ha expresado su rechazo a la solución política negociada: sus regresivas medidas económicas en contra de las mayorías populares, su implacable persecución a la oposición política, su creciente criminalización de la protesta social, su negativa al canje de prisioneros y su entrega de la soberanía nacional a los intereses extranjeros, son prueba de ello.

En numerosas intervenciones el mandatario colombiano ha reiterado que en Colombia no existe un conflicto armado interno sino una guerra contra las organizaciones del narcotráfico y el terrorismo negando el carácter político de la insurgencia armada y, con él, las raíces políticas y sociales de la última fase del conflicto colombiano, que ya cumple más de medio siglo.

De este modo, sordo al clamor de las mayorías nacionales, el balance de este primer cuatrenio en lo que a la paz respecta, ha significado un distanciamiento de la salida política negociada que el pueblo colombiano reclama insistentemente. Contrariando este sentir nacional, Uribe Vélez ha priorizado la confrontación armada, invirtiendo cantidades fabulosas para la guerra y abriendo las puertas para la intervención gringa.

No hay en esta actitud nada novedoso. El talante guerrerrista que caracteriza al presidente Uribe ha sido una constante de las élites gobernantes que han implementado el terrorismo de Estado, la eliminación física del adversario político, la militarización de la vida nacional y la continua aplicación de las medidas de excepción como mecanismos para contener las luchas populares.

La historia política nacional registra el asesinato de un incontable número de líderes cívicos y sociales, sindicalistas, campesinos, estudiantes y profesores, opositores al régimen bipartidista, siendo el caso más dramático el genocidio de más de 4 mil militantes de la Unión Patriótica, entre candidatos presidenciales, congresistas, diputados, dirigentes regionales, militantes de base y simpatizantes

Las operaciones militares contra Villarrica bajo la dictadura militar de Rojas (1955), la agresión a los campesinos de Marquetalia (1964), el ataque al secretariado de las FARC-EP en la Uribe (Meta) en momentos que el país votaba una nueva constituyente (1990), así como la decisión unilateral del presidente Pastrana de dar por terminado el proceso de diálogo con las FARC-EP en la zona desmilitarizada del Caguán (2002), constituyen algunos capítulos de esta historia.

Cuando la oligarquía colombiana habla de Paz...

Si bien el interés de las élites bipartidistas no ha sido la búsqueda del entendimiento civilizado y la solución política negociada, sino el exterminio físico de quienes cuestionan su predominio en el poder, cuando se han visto presionadas a hablar de paz, piensan en ella como la rendición incondicional de la insurgencia y la entrega de sus armas.

Este es el esquema de negociación que los diferentes gobiernos han venido aplicando y que ha funcionado para movimientos sin mayor capacidad militar, que han perdido su perspectiva política y que han abandonado sus principios revolucionarios a cambio de unas pocas curules y cargos burocráticos sin lograr transformaciones de ninguna naturaleza.

Porque las fórmulas de paz de la burguesía, nada dicen de las causas estructurales económicas, sociales y políticas del conflicto y, mucho menos, de cambios profundos a favor del pueblo. Y cuando éstos han sido inevitablemente planteados en la mesa de diálogo, recurren al engaño y a la mentira para declarar rotos los acuerdos y escamotear al pueblo colombiano la discusión de estos temas fundamentales.

Así sucedió durante los diálogos de Tlaxcala (México), cuando el gobierno modificó deliberadamente la agenda pactada, situación que se volvió a repetir en la zona desmilitarizada del Caguán, cuando el presidente Andrés Pastrana, unilateralmente dio por terminados los diálogos, pretextando el incumplimiento por parte de las FARC-EP de compromisos inexistentes.

El compromiso de las FARC con la paz

Desde sus orígenes, las FARC-EP hemos insistido en la búsqueda de una solución política que dé salida al conflicto social y político que vive el país. Pero somos unos convencidos, de que ésta sólo es posible sobre la base de alcanzar una verdadera justicia social, sustentada en cambios económicos y políticos estructurales, sólidos principios de soberanía, y el respeto de los derechos humanos por parte del Estado.

Nuestra VIII Conferencia Nacional señala que “La lucha por la Paz con justicia social, es la principal tarea que debe cumplir las FARC, como vía para conseguir con el pueblo la solución a los graves y crecientes fenómenos de descomposición social, corrupción, desempleo, carencia de libertades, miseria, entrega de los principales recursos a los monopolios extranjeros, y el ejercicio de la violencia terrorista del Estado, para imponer el modelo Neoliberal y aplicar sin oposición las recetas recibidas del FMI”.

Como prueba de la voluntad inquebrantable de paz de las FARC está la “Agenda Común para el Cambio hacia la Nueva Colombia”, la propuesta de “Plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”, la persistencia en un acuerdo en torno al “canje de prisioneros” y la disposición de entablar diálogos hacia la paz duradera con un gobierno que exprese esta misma voluntad de paz.

Sin embargo, está claro que este diálogo es imposible con el reelecto gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mientras persista en descalificar a la insurgencia armada como narcoterrorista y mientras siga criminalizando la protesta social y la inconformidad popular. Es cierto que el país necesita y merece la paz, pero Uribe representa todo lo contrario.